

# **Balance del Gobierno Zelaya DOS AÑOS MENOS, DOS AÑOS MÁS ¿Y HONDURAS QUÉ?**

## **De la redacción del FOSDEH**

Desde su creciente soledad y aislamiento, el Presidente Manuel Zelaya Rosales cruzó el 27 de enero la mitad de su mandato e inició los últimos dos años de la Presidencia más personalista en la historia de la transición democrática del país, atrapado en una maraña de pequeños y grandes favores a sus amigos, inmerso en una retórica confusa ante los poderes fácticos y carente de un proyecto que enfrente el agotamiento del modelo político y económico vigente desde 1982.

La indefinición es, quizá, el punto de contraste más notorio entre el Presidente Zelaya y su antecesor inmediato en el cargo, Ricardo Maduro. El ex presidente nacionalista representó, sin ningún pudor populista, los intereses y la ideología del gran capital, tanto de las familias más poderosas de Honduras como del Grupo Poma de El Salvador.

El ex Presidente, Maduro no se perdió en las líneas de su guión; lo suyo era facilitar el reparto de los grandes negocios, las concesiones más rentables y la apertura total a favor de las inversiones extranjeras. Bajo su gestión la privatización de los bienes públicos tuvo un nuevo aliento.

La agenda del poder se concentró alrededor de un puñado de rubros: producción de energía eléctrica (térmica), telecomunicaciones y telefonía (móvil y fija), turismo (Bahía de Tela) y servicios (franquicias), maquila y finanzas. Tras cada uno de ellos hay nombres y apellidos concretos.

En un país que suele asistir tardíamente a la historia, bajo la administración Maduro toma forma una oligarquía empresarial y financiera, estrechamente ligada al capital regional y transnacional, integrada —en la primera fila— por apenas unas diez familias. Para ellas el país está bien como está, sin importar cómo pueda subsistir la mayoría de la población pobre.

Quizá por su consolidación tardía y diversidad de inversiones, contrario a lo que en determinado momento histórico ocurrió en El Salvador, Guatemala y Costa Rica, esta oligarquía hondureña no asume un carácter nacionalista, sino de clara vocación al capital y mercado extranjero.

Los beneficiados principales acumulan un control tan vasto y directo sobre el Estado y sus agentes de mediación que ya no necesitan como instrumentos —al menos como hace algunos años— a las organizaciones gremiales empresariales (COHEP, ANDI y Cámaras de Comercio) e incluso a los partidos políticos puesto que llegan de manera directa a sus líderes, al Congreso Nacional y a la institucionalidad pública de su conveniencia.

## **UN PODER LIMITADO**

Se debe admitir que no es fácil gobernar bajo esas circunstancias. El Presidente Zelaya se topó, muy temprano, con ese poder empresarial/político en la cita de Farallones, convocado por Miguel Facussé y sus pares.

Desde ese momento temprano, Zelaya ocupó buena parte de sus dos primeros años en una retórica confrontativa con algunos de ellos, en especial con ciertos propietarios de medios masivos de comunicación, pero en ningún momento reveló nombres o precisó lo que estaba en disputa.

El punto es que el Presidente Zelaya y el Partido Liberal asumieron el gobierno carente de un pensamiento articulado, sin propuestas claras y sin un programa que

guiara a la administración pública hacia metas claras. Eso reduce los conflictos a temas puntuales, no estratégicos de la sociedad.

Como se afirmó en su momento, la integración del gabinete de ministros reflejó esa debilidad y lo que pudo haber sido una hábil jugada política del gobernante para ser el “gran hermano”, se convirtió en una de las grietas más grandes de su gestión. El gabinete nunca funcionó como un equipo, sino como la suma de dudosas lealtades al mandatario.

Dos años después, el Poder Ejecutivo mantiene una estructura anárquica y deficiente, con pequeños feudos ministeriales a los que la mayoría de sus titulares accedieron por el “favor personal” del Presidente, no en función de capacidades o méritos probados.

En la práctica no existen gabinetes sectoriales (social, económico-financiero y agrícola-recursos naturales) y tampoco una planificación pública con objetivos y metas complementarias. Las periódicas evaluaciones que el propio Presidente Zelaya hace de sus altos funcionarios, muchos de los cuales salieron “aplazados” por la UNAT, confirman una mala praxis administrativa.

Con esa valoración es obvia también la falta de coherencia en las políticas públicas. El caso más notorio es el abandono progresivo y real de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) y su reemplazo por otros programas asistencialistas o de compensación social, como la Red Solidaria, que encabeza la Primera Dama, o los constantes subsidios que se autorizan en áreas sensibles de la economía, como el consumo de combustibles.

En una sociedad con elevados niveles de pobreza, como la hondureña, los programas de compensación social se justifican y hasta se vuelven necesarios, pero son insuficientes como políticas de transformación social. Los mismos tienen tan poca credibilidad y sostenibilidad como el anuncio oficial de que la pobreza extrema bajó 7 puntos porcentuales en los dos años de gobierno y que también disminuyó la desigualdad.

¿Cuál es esa fórmula que debiera atraer la atención mundial?, se preguntan varios analistas, sobre todo si se toma en cuenta que en enero de 2008 el salario mínimo de un trabajador de la construcción es de apenas 92 lempiras diarios y en las maquilas 121 lempiras. La pregunta más bien sería ¿cómo subsiste una familia con tan pobres ingresos?

## **IMPROVISACION MÁS IMPROVISACION**

De la misma manera son insuficientes las acciones improvisadas y mediáticas que el gobierno alentó en estos dos años para afrontar los severos descabros financieros, administrativos y técnicos de empresas tan importantes como Hondutel y la ENEE.

Cada vez que el Poder Ejecutivo nombra una Comisión de Notables o una Comisión Interventora refleja no sólo la magnitud de los problemas sino su propia incapacidad para afrontarlos.

En la ENEE, por ejemplo, el Presidente se ha equivocado una y otra vez. Empezó su mandato nombrando como Gerente a Juan Bendeck, lo que parecía acertado, pero rápidamente lo despidió como castigo por una declaración en la que anunciaba la necesidad de contratar más energía térmica.

Con los meses se confirmó que la previsión de compra –por lamentable que fuera- era correcta, y que el cese de Bendeck lo que evidenció fue un estilo de gobierno imprevisto, improvisado y protagónico. El Presidente Zelaya llegó al grado de convertirse en “gerente” de la ENEE durante unos tres días antes de militarizar la institución.

Lo más reciente en la cadena de improvisación fue el traslado de Rixi Moncada de la Secretaría de Trabajo a la Gerencia de la ENEE, con el rango de Ministra de Energía. ¿Qué puede esperarse de ella si lo que resalta de fondo es la ausencia de una Política Energética Nacional?

Ese vacío, que se arrastra gobierno tras gobierno, se reflejó en el otro gran fiasco de estos dos años, cuando el Presidente intentó cambiar las reglas del juego en el mercado de la licitación de combustibles.

En la actualidad el asunto dio otro giro puesto que el empeño oficial por concertar un acuerdo de compra con Petrocaribe (Venezuela) no sólo es clave para asegurarse el combustible (bunker-c) y evitar el riesgo de nuevos “apagones”, sino que es una manera de que el gobierno disponga, para los próximos dos años, de los recursos financieros necesarios para no paralizar la burocracia o la llamada “inversión pública”. Los funcionarios del Poder Ejecutivo calculan que con ese convenio podrán disponer de al menos 10 mil millones de lempiras extras para el ejercicio fiscal que le resta. Por supuesto, será el próximo gobierno (2010-2014) el que deberá pagar la deuda con el dinero de los contribuyentes.

## **INGRESOS QUE LLEGAN, INGRESOS QUE CAEN**

Si en los primeros dos años la Administración Zelaya tuvo la suerte de disponer de un marco macroeconómico relativamente estable, lo que está por venir tiene el signo de la incertidumbre.

El principal ingreso, las remesas familiares, están en riesgo y a ello se suma el temor de sufrir las consecuencias de la recesión que se asoma en el horizonte de Estados Unidos.

Con el Presidente Zelaya la diplomacia del gobierno tuvo un éxito relativo al lograr la renovación del TPS en Estados Unidos (aunque menos se reinscribieron en el), pero fue incapaz de frenar, disminuir o mitigar las deportaciones masivas de compatriotas, que son devueltos en cifras sin precedentes.

Esa tragedia migratoria no impide, ni disuade, a centenares de hondureños y hondureñas que a diario abandonan el país por no encontrar las oportunidades laborales y sociales que desean para sus familias.

Con un crecimiento económico basado en el consumo, y un consumo que descansa en las remesas familiares, el pronóstico no es alentador para el futuro inmediato.

Bajo ese contexto, en el balance se puede afirmar que entre 2006 y 2007 no hubo ningún paso efectivo en dirección a una reforma ética-política y técnica del aparato estatal; tampoco se manifestó una preocupación por mejorar la calidad de los servicios públicos o por dinamizar el sector productivo. Si una expresión cabe es que Honduras sigue a la deriva.

En suma, la crisis de la gestión gubernamental en estos dos primeros años no se reduce a un problema de corrupción o ineficiencia, lo que está en entredicho es una modalidad de hacer política, de concebir el Estado y de pensar el cambio social.

La cantidad de desafíos no resueltos y muchos ni siquiera encarados confirman que aún reconociendo al Presidente Zelaya su intención a favor del cambio, la simple “voluntad política” es insuficiente si no existe una idea del Estado que se quiere construir, sin una doctrina política e ideológica consistente y sin alianzas programáticas sólidas.

Además, el Presidente Zelaya es, a su manera, víctima del deterioro del Presidencialismo y de la política tradicional. Con el modelo de ajuste, el verdadero poder se ha ido desplazando fuera de Casa Presidencial, al grado que es un espejismo pensar que en Honduras el sistema presidencialista lo puede todo-

## **DE PRONÓSTICO RESERVADO**

¿Cuál es el panorama que se avizora para los dos años restantes? Los pronósticos no son optimistas. En lo político la disputa electoral será agria e intensa. Si el cronograma elaborado por conveniencia de Micheletti y Pepe Lobo se mantiene, en noviembre de este año tendrán lugar las elecciones primarias.

Pocos son los aspirantes capaces de participar puesto que en marzo próximo, apenas a unos dos meses de distancia, los movimientos electorales internos deberán inscribir las planillas a nivel nacional.

Los pre candidatos que marchan con rezago tendrán dificultad para saltar los primeros obstáculos, lo que hace prever para después de marzo un juego intenso y pragmático de alianzas y adhesiones.

El panorama se complicará más aún si, como parece previsto, Roberto Micheletti se convierte en el candidato oficial del liberalismo puesto que, más que nunca, hará del Congreso Nacional su plataforma de lanzamiento. Del mal llamado "populismo" presidencial es previsible que se pase a un "populismo" legislativo. Con ello el presupuesto nacional de egresos e ingresos estará cada vez más lejos de convertirse en el instrumento de desarrollo que reclama la ciudadanía, y más cerca de ser la palanca de ambiciones personales y sectarias.

Con esas consideraciones, en el país resalta la necesidad de una gestión macroeconómica interna prudente, más austera, sin abuso del endeudamiento interno y externo. De hecho, no debiera ser una recomendación sino que una obligación puesto que el alza en los costos del petróleo se mantiene y será cada vez más difícil amortiguar su impacto inflacionario entre la población.

Preocupa que el 2007 cerró con un repunte inflacionario que golpea más a las capas medias y a los sectores empobrecidos. Aún sin la vigencia de una Carta o Convenio de Intenciones, el FMI está prendiendo la señal de alarma respecto a la economía hondureña.

Los vientos soplan en dirección a un recorte en el espacio de manejo fiscal del gobierno, pero las presiones al Estado tienden a intensificarse, como reflejo del sostenido crecimiento del consumo y el reclamo de deudas multimillonarias en el sector energético. Sólo a un empresario del ramo, el Estado le adeuda más de mil millones de lempiras.

Así, las dudas se acumulan para el 2008 y el 2009. La anunciada disminución en el caudal de remesas reta a la política económica oficial. Las circunstancias exigen una planificación correcta de la inversión pública y un control efectivo para combatir la corrupción, pero lo electoral complica todo.

En definitiva, el país requiere mejorar la calidad de la toma de decisión del sector público en su conjunto, no fragmentado, y no sólo en el tema económico sino social y política.

¿Cómo lograrlo? No hay fórmulas mágicas, pero la gobernabilidad hondureña requiere más apertura democrática, no menos apertura; lo que significa más participación ciudadana, capacidad organizativa y transparencia electoral.

No hay mucho tiempo disponible para un cambio de dirección gubernamental; la creciente inseguridad pública y el ahondamiento de las brechas sociales empujan a una mayor desintegración nacional. Los retos son tan grandes que las acciones gubernamentales no pueden limitar a relevos de personas, sino de políticas y prácticas.

Para cerrar su gestión y recuperar parte del tiempo perdido, el Presidente Zelaya necesita negociar acuerdos básicos con la ciudadanía y con el empresariado que respondan a los intereses del conjunto de la sociedad, pero la oportunidad de hacerlo se cierra paulatinamente. ¿Estará consciente el mandatario de ello?